

Las elecciones mexicanas del 2009. ¿Harán alguna diferencia?

Víctor Alarcón Olguín
Seminario México

SIN DUDA, EL AÑO 2008 desplegó complejas manifestaciones políticas y financieras que han puesto en jaque a más de un gobierno en el mundo. Si bien se pudo cerrar con el acuerdo legislativo más importante (la reforma energética) que ha sido aprobado durante la presente gestión presidencial, los electores tendremos que ir a votar no sólo para expresar una evaluación de lo conseguido hasta ahora por la gestión presidencial panista en este sexenio, sino que debería ser una oportunidad para intentar la definición de respuestas ante un año 2009 que será -en palabras del propio presidente Calderón- “adverso” por la abierta condición recesiva en que se debatirán nuestra calidad de vida e ingresos. Por ello, junto con el llamado voto económico, el debate de esta elección estará impulsado por factores como la inseguridad pública y el futurismo que se tiene con miras al proceso electoral del 2012.

Por desgracia, pocos apuntan hacia vislumbrar que para los siguientes años, resulta importante la formación de una sólida mayoría legislativa (sea del signo que fuere) que pueda fortalecer la gobernabilidad, además de que permita tener un interlocutor más claro frente a la ciudadanía y los restantes poderes de la Unión. Nadie duda que el Poder Legislativo exprese la pluralidad nacional, pero por desgracia, ésta se mantiene bajo una suerte de “equilibrio catastrófico”. Las condiciones prevalecientes desde 1997 (que no han tendido a la cooperación sino al bloqueo mutuo) impiden construir opciones para encarar los problemas de interlocución y lentitud con que los grupos parlamentarios y los partidos políticos procesan una agenda que debería ofrecer mejores y más contundentes resultados.



De la serie
Cartografías,
XVII,
81 x 64 cm

Enfrentamos un contexto donde las amenazas a la estabilidad nacional han sido incluso advertidas por las diversas autoridades electorales respecto a los riesgos de infiltración en los comicios por parte del crimen organizado. El proceso electoral igualmente lidia con el reto de probar la bondad de los cambios aprobados por el Congreso en 2007 y 2008. A manera de ejemplo, me concentro en las decisiones del IFE y el TEPJF, cuya lógica parece ser vista como errática por parte de los propios partidos. Eventos tales como las sanciones retroactivas impuestas al PRD por los plantones realizados en la campaña del 2006, o la más reciente aplicación de una nueva variante de “causal abstracta” para sancionar conjuntamente al PAN, PRI y PVEM, por el beneficio que obtuvieron de la emisión de los anuncios pagados por el Consejo Coordinador Empresarial, no han sido vistos como buenos indicadores que vengán a favorecer un mejor entorno para las elecciones en la óptica de los propios partidos.

De igual manera se puede rescatar la polémica abierta por los criterios que impulsaron la decisión del TEPJF para otorgar el triunfo a la corriente Nueva Izquierda en los comicios por la dirigencia del PRD. La legislación interna determinaba que en caso de existir irregularidades en más del 20% de la votación, ello motivaba la anulación automática del proceso. En su momento, todos los candidatos

impulsaron que la Comisión Nacional de Garantías del partido anulara el fallo, cosa que se realizó, para intentar abrir espacio a la negociación y diferir una nueva contienda hasta el año 2010. Pero posteriormente, los candidatos Jesús Ortega y Alfonso Ramírez Cuéllar dieron marcha atrás y terminaron por presentar impugnaciones ante el TEPJF para evitar la decisión de dicho órgano interno del PRD.

Con este antecedente, la decisión del TEPJF de revisar y validar el cómputo total del 9 de mayo de 2008 (producto también de un fallo dictado por esa misma instancia) se sustenta en que la votación finalmente anulada se situó “sólo apenas” tres puntos por arriba del nivel de 20%, y por tanto “no era determinante” para revertir el resultado. Sin embargo, la cantidad de votos anulados en el proceso llegó al 30%, porque el órgano electoral del PRD ya había anulado de origen un 11% de los votos emitidos, y extrañamente esos votos ya no fueron considerados en el nuevo cómputo. La preocupación común en todos estos casos es que se confunda la impartición de la justicia con una “lógica de los equilibrios y compensaciones”.

Finalmente, al momento de redactar este escrito, también se sigue sin tener resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia respecto a los recursos interpuestos por el CCE y un conjunto de intelectuales, en torno a poder manifestarse como particulares mediante la compra de tiempos en radio y televisión durante los procesos electorales (medios ahora proscritos por el nuevo COFIPE). Como se puede ver, los caminos para allanar un mejor clima político no encuentran una buena salida para los ciudadanos y en cambio, vemos como los propios partidos ya han comenzado a esquivar las disposiciones en la materia.

El riesgo de tener un nivel de participación similar o menor a lo observado en las elecciones intermedias del 2003 es muy alto, a pesar de que la reforma al calendario electoral obliga que se lleven a cabo comicios concurrentes para renovar a las autoridades estatales en sincronía con los comicios federales. Esto permitirá corroborar si habrá más motivación a participar y observar si las tendencias del votante mexicano se articulan o se mantienen agendas separadas en los ámbitos de votación local y federal.

En este sentido, resulta interesante ir a la comparación con lo ocurrido en el sexenio de Vicente Fox, cuya popularidad no bastó y generó el resultado regresivo para el PAN en el Congreso. La gestión calderonista está siendo expuesta a una dinámica similar: un entorno poco propicio para los albiazules derivado de las elecciones celebradas en las entidades en los años 2007 y 2008, donde particularmente el PRI

ha tenido niveles de recuperación importantes en materia de gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Cabe adicionar a esto la crisis experimentada en 2007 y 2008 con relación al control de su dirigencia, lo que tampoco le ha mostrado una mejor imagen al ciudadano acerca de las prácticas democráticas internas que allí se deberían realizar. Esta crisis de imagen incluso ha llegado a pegar en partidos como el actual PSD y el PRD, en donde la presencia de la violencia en el manejo de asambleas o el conflicto mediático como factor contaminante de sus procesos electorales no puede ser motivo de vanagloria para nadie.

Derivado de los factores antes expuestos, las elecciones del 2009 suponen una importancia evidente para todos los partidos. Para el PAN, implica obtener una mayoría que pueda permitirle al gobierno actual un mejor margen de negociación de cara al PRI y el PRD, así como están en riesgo 2 de sus gubernaturas (San Luis Potosí y Querétaro); pero a la vez se presenta como contendiente serio en estados como Sonora y Nuevo León; e incluso en Colima y Campeche, todas ellas entidades actualmente gobernadas por el PRI, y en donde el PAN se ostenta hasta ahora como la segunda fuerza entre los electores.

Para el partido tricolor, los comicios le implican colocarse nuevamente en una posición que le prepare para intentar el retorno a la presidencia en el 2012, y en donde destaca el despliegue mediático nacional de Enrique Peña Nieto, aunque ello no omite las pretensiones de Manlio Fabio Beltrones y la propia líder nacional Beatriz Paredes.

Para el PRD, estas elecciones sin duda pueden ser una dura constatación de que el electorado es volátil y temeroso a las inconsistencias entre el discurso y la práctica. Con la ruptura del FAP en el contexto electoral, los electores tendrán que distinguir claramente entre dos corrientes de acción y voto en la cual, si bien la presencia y el aval de Andrés Manuel López Obrador termine reconociendo ambas, en los hechos hará crecer directamente al PT y Convergencia, dando pauta entonces a que la separación final de su corriente dentro del propio PRD pueda terminar por concretarse para el año 2012 o antes, en tanto también comenzará a darse el ejercicio de prueba que estos comicios pueden darle a Marcelo Ebrard. Por ello, la posición de AMLO es crucial.

Imaginemos si éste aceptase una candidatura para encabezar un bloque PT-Convergencia-PRD en el Congreso. Sin duda, tendría la exposición mediática nacional necesaria para proseguir en sus aspiraciones hacia el 2012, pero al mismo tiempo también tendría el reto de moderar la es-

trategia de golpeteo hasta ahora mostrada para presentarse no sólo como un “ayatola moral”, sino como un verdadero demócrata dispuesto a debatir, así como ganar y perder en el contexto de las votaciones. De lo contrario, la ruta de AMLO se mantendrá en una condición asociada con el desarrollo de su movimiento y sus giras en tanto “presidente legítimo”.

Dado que no hay una oferta de nuevos partidos en estas elecciones, partidos como el PVEM, PSD y PANAL están apuntando hacia la configuración de alianzas eventuales con el PRI, PRD y el PAN, respectivamente, en la clara perspectiva de sobrevivir dentro del mercado electoral. Esto nos da una idea concreta de cómo podrá darse el reacomodo de preferencias para estos próximos comicios.

Con un partido gobernante ciertamente a la defensiva, y el resto de los contendientes tratando de ubicarse de mejor forma hacia el 2012 –si es que sobreviven a sus peleas internas–, las elecciones del 5 de julio de 2009 nos ofrecen un mosaico en el cual, los electores seguramente tendremos más de lo mismo en términos de campañas y actitudes negativas por parte de los políticos. La expectativa de tener elecciones renovadas y confiables quizás tenga que esperar para después. •

VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN. Es Profesor e Investigador del Departamento de Sociología en la Unidad Iztapalapa de la UAM y director asociado de *Casa del Tiempo*. Correo electrónico: alar@xanum.uam.mx

COMENTARIOS

Miguel Ángel Valverde Loya / ITESM-CCM

Los conflictos al interior del PRD y la posibilidad de una ruptura, alterarían el esquema del régimen de partidos en México, con implicaciones importantes en términos de probables coaliciones electorales y legislativas. Una división debilitaría al PRD, al menos temporalmente. Los grupos que lo abandonen muy probablemente engrosarían las filas de los otros miembros del Frente Amplio, pero cargándose a la izquierda del espectro partidista, difícilmente teniendo otros aliados (incluido el PRD, al menos en el corto plazo). Por otro lado, un PRD con predominio de la corriente Nueva Izquierda, de orientación más moderada, si bien quizá sería un mejor interlocutor para el gobierno de Felipe Calderón, se ubicaría ideológicamente más próximo al PRI, lo que aumentaría las posibilidades de alianza entre estos dos partidos. Esta racionalidad (sugerida por la líder priísta Beatriz Paredes, criticada por ello) se ve difícil y complicada, pero no dejará de ser una tentación, al menos para algunos militantes.

Jorge Cadena Roa / UNAM

Las elecciones de 2009 indicarán cómo evalúan los electores a los partidos. Aunque en las elecciones intermedias hay una lógica local insoslayable, los resultados para el PAN representarán una valoración de la gestión presidencial; los del PRD una evaluación del no reconocimiento de AMLO al resultado de la elección de 2006 que tiene al partido al borde de la fractura –un descalabro en 2009 sería achacado a la presidencia de Ortega, no a AMLO & Co, un buen resultado fortalecería a la nueva presidencia; los resultados del PRI permitirán saber si su recuperación en algunos estados tiene proyección federal y si lo colocan en la antesala de Los Pinos; esta vez los partidos pequeños van por su cuenta y sabremos cuánto valen solos. Aunque se formen mayorías legislativas más amplias, la negociación en las cámaras no cambiará mucho porque el costo de tomar decisiones al margen del PRD seguirá siendo prohibitivo: se regalarían banderas que AMLO agitaría para su causa.

Helena Varela / UIA

En un acto que conmemoraba el segundo año de la presidencia de Calderón, éste reconoció que el año 2009 iba a estar marcado por las divergencias y las tensiones entre los actores políticos. La declaración es preocupante: cuando comenzábamos a recuperarnos, como sociedad, del conflicto y confrontación ocurridos en las últimas elecciones presidenciales, nuevamente se anuncia un escenario de polarización. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el 2009 y el 2006 (además del hecho de que unas elecciones intermedias nunca suscitan el interés y la pasión que unas presidenciales): esa diferencia es la reforma electoral aprobada hace algo más de un año, como resultado de los acuerdos de los partidos políticos. Quizá entonces, ante el anuncio del presidente de la república, lo que nos depara el 2009 es la puesta a prueba del alcance de la última reforma electoral, viendo hasta qué punto instituciones y partidos logran evitar que se repita una confrontación política que ponga en riesgo el próximo proceso electoral.